

Dr. Lic. don
Salvador Falla.

P

La Asamblea Nacional Legislativa

—Y EL—

DECRETO No. 456



*Consideraciones acerca de esta ley y temas de discusión
sobre la misma*

POR

JUAN ANTONIO AGUIRRE,

Estudiante de Derecho.

1893

GUATEMALA

Tipografía "Norte-Americana"—5a. Calle Oriente, primera puerta.

La Asamblea Nacional Legislativa

—Y EL—

DECRETO No. 456

*Consideraciones acerca de esta ley y temas de discusión
sobre la misma*

POR

UN ESTUDIANTE DE DERECHO

1893

GUATEMALA

Tipografía "Norte-Americana"—5a. Calle Oriente, primera puerta.

La Asamblea Nacional Legislativa

DECRETO No. 456

EL DECRETO No. 456

Y LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA

“La idea fundamental en la creación de las modernas constituciones es la separación de los departamentos del Gobierno en cuanto sea practicable y la conservación de claras líneas de división entre ellos; é indudablemente la continuación de una libertad reglada depende de mantener estos límites.

DANIEL WEBSTER.”

La juventud que asiste á las aulas, ese conjunto allagüeño de esperanzas para el país, esa generación que mañana dirigirá los destinos de la Patria, debe ser la primera en interesarse porque así en el campo de la ciencia como en el de la ley y de la política, queden perfectamente resueltos y definidos los problemas sociales que al presente se discuten; y su interés debe ser mayor, por cuanto que todo paso en el orden social como en el individual, establece precedentes para el porvenir de la Nación y para el de cada ciudadano, y ese porvenir sólo es para la juventud.

El grado de adelanto á que por fortuna ha llegado Guatemala, permite que los que hasta hoy por nuestra edad vivimos ajenos á las luchas de la polí-

tica y exentos por lo mismo de las pasiones de partido, usando del derecho que otorga la libertad de imprenta, vengamos hoy á invitar al resto de la juventud del país y especialmente á la que se ha iniciado en la ilustre carrera del derecho,—como la más llamada para el caso,—para que se sirva prestar su contingente en la discusión y resolución de los problemas sociales, sin miramiento á personas, tiempos ni lugares; y para que estudiando esos problemas en el terreno de la ciencia abstracta y de su aplicación en la práctica, externen su opinión con la franqueza del que no lleva otra mira que la de hacer luz en una cuestión social.

A esa juventud, pues, nos dirigimos, seguros de que no oirá con indiferencia el llamamiento de sus compañeros de hoy y que tal vez lo serán de mañana en otra esfera ya de bondad ó de infortunio.

No son de escaso valor ni de tan poca trascendencia las difíciles cuestiones jurídicas, políticas y económicas que se ventilan entre los brazos Legislativo y Ejecutivo del Poder Público de la Nación; y gracias á que el imperio de la libertad en todas sus manifestaciones permite presenciar el gran espectáculo de la lucha pacífica y razonada de esas dos ramas, á estilo de los países más avanzados en el ejercicio de la libertad, y que ambas, animadas del sentimiento común de procurar el bien de Guatemala, hoy, en razonada controversia, ventilen el límite de sus respectivas atribuciones con motivo del Decreto núm. 456 que emitió el Ejecutivo con fecha 1º de Agosto.

Las cuestiones que á nuestro juicio se deben discutir con aquel motivo y que se resolverán únicamente con el contexto de la ley fundamental son las siguientes:

PARTE GENERAL

1ª ¿Qué miembro del Poder Político, según la ley fundamental de Guatemala, es el llamado á calificar y á declarar la inconstitucionalidad de las leyes ó disposiciones de las otras ramas del Poder?

2ª ¿Fuera de las atribuciones que la carta fundamental señala á cada rama del Poder, se le podrá permitir alguna otra facultad que sin estar prohibida no esté expresamente puntualizada?

3ª ¿Las resoluciones ó disposiciones emanadas de cada miembro del poder en la órbita de sus atribuciones, podrán ser anuladas por cualesquiera de los otros miembros?

4ª ¿A qué poder corresponde reglamentar la forma y condiciones del pago de los impuestos y contribuciones establecidas por las leyes vigentes?

5ª ¿La Comisión Permanente de la Asamblea podrá calificar y declarar desde luego la inconstitucionalidad de una ley emitida por el Ejecutivo?

6ª ¿En virtud de esa calificación y declaración podrá con sólo mayoría en la discusión y resolución convocar á sesiones extraordinarias?

PARTE CONCRETA

7ª ¿El decreto N° 456 alterará la ley monetaria vigente y establecerá nuevos impuestos ó contribuciones?

8ª ¿Facultado el Poder Ejecutivo por el Poder Legislativo, en primer término para reformar el Código

Fiscal con la restricción de no alterar los impuestos establecidos, y posteriormente para llenar el déficit de su presupuesto, sin taxativa alguna, pudo el Gobierno alterar los impuestos?

He aquí las cuestiones capitales que se hallan en el tapete de la discusión, y que como dijimos al principio son graves y de una importancia tal, que deben estudiarse sin pasión alguna, sin atender á intereses de partido; debiendo verse sólo á la luz de la razón y de la ley fundamental.

Vamos á entrar en materia con la confianza de que si nuestro voto pudiera estar errado, los demás estudiantes de Derecho, los señores letrados y todos los que quieran tomar parte en esa discusión patriótica se servirán sacarnos de él con su ilustrado y recto parecer; pues como hemos dicho, no nos guía otra cosa en este humilde trabajo, sino el deseo de que en las prácticas del régimen verdaderamente constitucional imperen como ley suprema, la razón y la carta fundamental.

¿Qué miembro del Poder Político, según la constitución de Guatemala, está llamado á calificar y declarar la inconstitucionalidad de las leyes y disposiciones de las otras ramas del mismo Poder?



Examinado y estudiado con recto é imparcial criterio el contexto de la carta fundamental del País y las doctrinas sociales que le sirvieron de base, encon-

tramos que el Poder Supremo de la Nación es republicano, democrático y representativo, y se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, habiendo en sus funciones entera independencia. (1)

Cada uno de estos miembros tiene atribuciones señaladas en la misma ley fundamental, (2) y entre esas atribuciones por cierto que no se encuentra en ninguna de las apuntadas la de calificar y declarar la legitimidad de los actos y disposiciones de los demás miembros del Poder, salvo los casos siguientes, que necesitan por parte del Legislativo su aprobación para ser leyes: 1º El presupuesto fiscal que le presenta el Ejecutivo: 2º La cuenta de los fondos invertidos en la administración pública como la de los gastos imprevistos y necesarios: 3º Los tratados y convenciones que el Ejecutivo celebra con los demás países: 4º Los actos que hubiere practicado en el ejercicio de las facultades que le hubiere con-

(1) Art. 3.º de la Constitución.—El Poder Supremo de la Nación es republicano, democrático y representativo, y se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y habrá en sus funciones entera independencia.

(2) ATRIBUCIONES DEL PODER LEGISLATIVO.

Art. 52.—Corresponde al Poder Legislativo:

1.º —Abrir y cerrar las sesiones ordinarias y extraordinarias:

2.º —Hacer el escrutinio de votos para Presidente de la República y proclamar popularmente electo al ciudadano que hubiere obtenido mayoría absoluta de votos:

3.º —Elegir Presidente entre los tres candidatos que hayan obtenido el mayor número de sufragios, en el caso de que no hubiere elección popular por falta de mayoría absoluta de votos:

4.º —Nombrar los Designados en las últimas sesiones de cada año:

ferido el Legislativo: y 5º los tratados de paz. (1)

Por parte del Ejecutivo y del Judicial no existen atribuciones para declarar y calificar la legitimidad de las leyes y resoluciones de los otros miembros, y si es verdad que el primero puede oponer veto á las leyes emitidas por la Asamblea, esa facultad en nada se refiere á la legitimidad de la disposición ni á la facultad de emitirla, sino á la conveniencia de su aplicación.

No puede concederse á ninguno de los miembros del Poder esa calificación, porque, á la independenciam en las funciones de cada uno de ellos, se agrega la igualdad de importancia y valor social de sus poderes y el origen de sus facultades, ya que todos provienen de la soberanía que sólo reside en la Nación.

Ni la Asamblea, ni el Poder Ejecutivo, ni el Judicial ejercen en su plenitud la soberanía; cada uno de ellos tiene funciones diferentes que llenar é igual-

5. º —Dar posesión al Presidente de la República y recibirle la protesta de ley:

6. º —Admitir ó no, según lo estime conveniente, la renuncia que haga el Presidente de la República:

7. º —Conceder ó no permiso al Presidente de la República, para ausentarse del territorio de Centro-América:

8. º —Designar la persona que debe subrogar, durante su ausencia, al Presidente de la República, cuando éste haya obtenido permiso para ausentarse del territorio de Centro-América:

9. º —Hacer el escrutinio de votos para Presidente, Magistrados y Fiscales de los Tribunales de Justicia, cuya elección será popular directa, y proclamar popularmente electos á los ciudadanos que hubieren obtenido mayoría relativa de votos:

10.—Admitir ó no la renuncia que hagan el Presidente, Magistrados y Fiscales de los Tribunales de Justicia, y de-

(1) Incisos 2.º, 4.º y 9.º, art. 54 de la Constitución.

dad de importancia en los fines sociales que persigue.

La Asamblea Legislativa emite las leyes: el Ejecutivo las hace cumplir y el Judicial las aplica, examinando los casos particulares de controversia que se presentan en la práctica de los derechos.

La forma republicana, democrática y representativa del Gobierno de la Nación nos explica bien claro que no existe omnipotencia en ninguno de los Poderes: que todos éstos son delegados del único soberano que es el pueblo, y que sólo éste es el que puede calificar y declarar la legitimidad: que se legisla en su representación: que se manda ejecutar la ley en su representación, y que se aplica á los individuos en particular por los tribunales y jueces en su representación también; y que nada se hace en ellos por su propia voluntad, sino por delegación del pueblo que dió la ley fundamental, primera y única regla de conducta.

signar las personas que deban subrogarlos para completar el período constitucional, por admisión de la renuncia ó falta absoluta de alguno de dichos funcionarios:

Art. 53.—También es atribución de la Asamblea, declarar si ha lugar ó no á formación de causa contra el Presidente de la República, Ministros del Despacho, Consejeros de Estado, Magistrados, Fiscales de los Tribunales Superiores y Fiscales del Gobierno.

La ley de responsabilidades determina la forma del procedimiento, y el Tribunal que deba conocer en la causa.

Art. 54.—Son también atribuciones del Poder Legislativo:

1. ° —Decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes que deben regir en todos los ramos de la Administración:

2. ° —Fijar cada año los gastos de la Administración pública, aprobando ó reprobando el presupuesto que debe presentar el Poder Ejecutivo:

3. ° —Decretar las contribuciones ó impuestos ordinarios que se necesiten para cubrir el presupuesto de los gastos de la Administración y los créditos reconocidos:

Un error muy notable es, á nuestro juicio, el de suponer en las Asambleas una omnipotencia que la ley constitutiva no les da; y no se las da porque el Poder Legislativo sólo es un miembro del organismo que representa la soberanía.

Conceder la representación de ésta á la Asamblea sería desnaturalizar la forma republicana y representativa.

Véase detenidamente la Constitución, estúdiense con calma y juicio las atribuciones de cada uno de los miembros del Poder Político, y no podrá menos que confesarse que ninguno de esos miembros tiene superioridad en los otros, y que los tres sólo son facces de una misma entidad que se llama Poder Público.

La idea científica del gobierno republicano y representativo repele la teoría, que algunos autores sostienen de que los congresos y asambleas son los

4. ° —Aprobar ó no anualmente la cuenta que debe presentar el Ejecutivo, de los fondos invertidos en la Administración pública, así como de los gastos imprevistos que hayan sido necesarios:

5. ° —Decretar impuestos extraordinarios cuando la necesidad lo exija:

6. ° —Autorizar al Poder Ejecutivo para celebrar contratos y negociar empréstitos en el interior ó en el extranjero, y garantizar el pago con las rentas de la Nación:

7. ° —Examinar las reclamaciones contra el Erario público por créditos no presupuestos, y reconocidos por la Asamblea, señalar fondos para su amortización:

8. ° —Fijar la ley, el peso y el tipo de la moneda nacional, y fijar también el sistema de pesas y medidas:

9. ° —Aprobar ó reprobear, antes de su ratificación, los tratados y las convenciones que el Ejecutivo celebrare con los demás países:

10.—Decretar pensiones y honores públicos por grandes servicios prestados á la Nación:

representantes de la soberanía y que por lo mismo son omnipotentes.

En el gobierno republicano y representativo la soberanía reside en la Nación, quien la ejercita por medio del Poder Público que se divide en tres miembros por ser tres las funciones que llena: 1ª la de dar reglas; 2ª la de hacer que se ejecuten éstas; y 3ª la de aplicar esas reglas en los casos prácticos que se presentan. No reconoce superioridad en ninguno de los miembros y sí igualdad en el poder.

Consecuencia entonces será de las doctrinas antes indicadas y de los preceptos de la Constitución vigente, que la Asamblea no tiene facultad legal para calificar y declarar la inconstitucionalidad de las leyes y resoluciones emitidas por los Poderes Ejecutivo y Judicial; que por lo mismo sólo puede hacer y resolver en aquello en que la Constitución le da competencia.

11.—Autorizar al Ejecutivo para que emita aquellas leyes que por su extensión no puedan ser expedidas por el Poder Legislativo, al que deberá dar cuenta de ellas en su oportunidad:

12.—Conceder facultades extraordinarias al Ejecutivo cuando lo demande la necesidad ó el interés de la República; determinando en el Decreto cuáles son las facultades.

13.—Aprobar ó desaprobar los actos que hubiese practicado el Poder Ejecutivo, en el ejercicio de las facultades que se le hayan concedido:

14.—Conferir los grados de Brigadier y General de División cuando el Ejecutivo lo proponga y acompañe, para el efecto, la hoja de servicios del propuesto.

15.—Declarar la guerra y aprobar los tratados de paz:

16.—Decretar las amnistías y los indultos generales cuando lo exigiere la conveniencia pública:

Art. 55.—Corresponde asimismo á la Asamblea:

1º.—Elegir en la apertura de sus sesiones, el Presidente,

La independencia armónica de los Poderes es la garantía contra las usurpaciones de unos miembros en las atribuciones de los otros, pero ninguno de ellos es Juez en su propia causa. El Juez es el pueblo y nada más que el pueblo.

Necesario es que quede aquí bien establecida nuestra opinión, para que no se crea que tratamos de desvirtuar las disposiciones legítimas del Poder Legislativo, ni de los otros Poderes.

Queremos, y así parece que está establecido en la ley fundamental, que cada Poder realice su fin dentro de la órbita que le señala la Constitución; y que ningún pretexto lleve á los poderes á sostener luchas que en rigor no tienen razón de ser. Luchas que vistas con la calma filosófica que demandan las grandes cuestiones sociales, sólo pueden producir el desprestigio del Poder que las provoca.

La grandiosa idea del gobierno republicano, demo-

Vice-Presidente y demás funcionarios que componen la mesa, conforme al reglamento interior.

2.º.—Calificar las elecciones de sus respectivos miembros, y aprobar ó reprobar sus credenciales:

3.º.—Admitir ó no las renunciaciones que presenten y mandar que se proceda á nuevas elecciones, para llenar las vacantes que ocurran por el motivo expresado ó por otro alguno:

4.º.—Formar el Reglamento de su régimen interior:

5.º.—Hacer concurrir á los Diputados ausentes y corregir las faltas ú omisiones de los presentes:

DE LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO.

Art. 77.—Son deberes y atribuciones del Poder Ejecutivo:

1.º Defender la independencia y el honor de la Nación y la inviolabilidad de su territorio:

2.º—Observar y hacer que se observe la Constitución y las demás leyes:

3.º—Velar por la pronta y cumplida administración de justicia:

crático y representativo, si al principio no pudo comprenderse en toda su plenitud por los países latino-americanos, hoy por fortuna ha conseguido, mediante el transcurso del tiempo, con paso lento pero seguro, ir infiltrándose en todos los países de la América hispana y ha logrado pasar de la teoría á la práctica en la mayor parte de esos países. Guatemala es uno de ellos, y merced al impulso de todos los elementos sociales con que cuenta para caminar en la vía de un progreso no sólo material sino moral, puede hoy dar el grandioso espectáculo, como hemos dicho antes, de una lucha razonada entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo como lo estilan los países cultos.

No tenemos Poder moderador, como en las monarquías constitucionales, para calificar la inconstitucionalidad de las leyes emitidas por cualquiera de las ramas del Poder en el límite de sus atribuciones. Tampoco existe con debida precisión, señalada en la

4. ° —Velar por la conservación del orden público:

5. ° —Dar á los funcionarios del Poder Judicial los auxilios y fuerza que necesiten, para hacer efectivas sus providencias:

6. ° —Dirigir la Instrucción Pública, crear establecimientos de enseñanza, y reglamentar los sostenidos con fondos nacionales.

Tiene también la suprema inspección sobre las escuelas y demás establecimientos de enseñanza, aun cuando no sean sostenidos con fondos nacionales:

7. ° —Cuidar de la recaudación y administración de las rentas nacionales y decretar su inversión con arreglo á las leyes:

8. ° —Nombrar á los Secretarios de Estado, admitir su renuncia y separarlos del servicio:

9. ° —Nombrar á los Jueces de 1. ° instancia á propuesta en terna de la Corte Suprema de Justicia:

10. —Nombrar á los funcionarios del orden gubernativo

Constitución vigente la manera de evitar ó impedir la violación de los derechos de la sociedad por alguno de los miembros del Poder. Será pues un vacío en la carta fundamental, pero es lo cierto que no otorgando esta facultad á ninguno de los Poderes para aquel efecto, ninguno de esos órganos de la soberanía puede de autoridad propia hacer la declaración de inconstitucionalidad.



¿Fuera de las atribuciones que la carta fundamental señala á cada miembro del Poder Público, será permitido que use de otra facultad que, sin estar prohibida, no esté expresamente puntualizada?

La Constitución al señalar á cada Poder su esfera

y militar; trasladarlos de un punto á otro cuando así convenga al servicio público:

11.—Conferir grados militares hasta el de Coronel inclusive:

12.—Dirigir la fuerza armada, organizarla y distribuirla según sea conveniente:

13.—Levantar la fuerza que sea necesaria para contener una invasión extranjera, ó para impedir ó sofocar las insurrecciones interiores:

14.—Nombrar Ministros Plenipotenciarios, Residentes, Encargados de Negocios y Cónsules para el servicio de la República en el extranjero:

15.—Recibir á los Ministros y demás Enviados de las otras naciones y dar el exequátur á las patentes de los Cónsules extranjeros:

16.—Expedir pasaporte á los Ministros y demás enviados de las otras naciones y retirar el exequátur á las patentes de los Cónsules en los casos prescritos por el derecho internacional:

17.—Expedir las ordenanzas y reglamentos que sean ne-

de acción designándole sus atribuciones y límite de éstas, es indudable que tiene por fin principal evitar la usurpación y el despotismo en cualesquiera de los miembros del Poder, y además designar la regla única que debe servir para las funciones de cada órgano.

La naturaleza misma también de la forma del Gobierno republicano y democrático, que exige la división de las funciones del Poder, requiere á la vez el señalamiento de las atribuciones, como límite de cada rama.

Y si como con tanta verdad dice Mr. Webster, *el primer objeto de un pueblo libre es conservar su libertad, y la libertad sólo se conserva estableciendo restricciones constitucionales y justas divisiones del Poder*

cesarios para facilitar y asegurar la ejecución de las leyes en todos los ramos de la Administración:

18.—Suspender las garantías de acuerdo con el Consejo de Ministros, cuando lo exija el orden público:

19.—Someter á la Asamblea, para su aprobación, los tratados que hubiere celebrado:

20.—Convocar á la Asamblea á sesiones extraordinarias cuando hubiere asuntos graves y urgentes; y

21.—Sancionar las leyes y promulgar aquellas disposiciones legislativas que no necesiten de la sanción del Ejecutivo.

Art. 78.—El presidente de la República tiene la facultad de conmutar la pena que sea mayor en la escala general de la penalidad, en la inmediata inferior; y de conceder indultos por delitos políticos y aun por los comunes cuando la conveniencia pública lo exija ó el peticionario tenga á su favor servicios relevantes prestados á la nación. Una ley reglamenta el ejercicio de esta facultad.

DEL PODER JUDICIAL.

Art. 85.—El Poder Judicial se ejerce por los Jueces y tribunales de la República; á ellos corresponde exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales.

Político; es indudable que todo gobierno de derecho tiene que imponer numerosas limitaciones y calificaciones de autoridad y dar muchos derechos positivos y calificados. En otros términos, tiene que estar sujeto á reglas determinadas ya que esa es la esencia misma de las instituciones políticas libres.

*El espíritu de libertad es ciertamente un espíritu audaz y sin miedo; pero es también un espíritu de vista perspicaz; es cauteloso, sagaz, discernidor, de una inteligencia de largo alcance; es celoso de las usurpaciones; celoso del poder; celoso del hombre. Exige frenos; busca guardianes, exige seguridades: se atrinche-
ra detrás de fuertes defensas y se fortifica cuidadosamente contra los ataques de la ambición y de la pasión. No confía en la amable debilidad de la naturaleza humana, y por eso no permitirá que el poder, en cualquiera de sus ramas, traspase los límites prescritos; aunque sea por benevolencia, con buena intención y patrióticos fines.*

La doctrina de nuestro derecho civil positivo que establece que "á ninguno puede impedirse lo que la ley no prohíbe," queda perfectamente para los asuntos del orden privado, esto es, para los que atañen á intereses particulares de los ciudadanos, mas no para aquellos que se refieren á intereses de la Nación, donde no hay más pauta de conducta que la carta fundamental.

En el primer caso se justifica la potestad de obrar cuando no hay prohibición, porque al hacerlo el ciudadano, no usurpa derecho ajeno reconocido por ley: obra por derecho propio y no por delegación; pero en el segundo caso, esto es, cuando se trata de los intereses de la Nación y de los miembros del Poder Público, no sucede lo mismo: entonces, obrando sin atribución determinada, se usurparían por una rama

del Poder, derechos que sólo competen á la Soberanía, que como hemos dicho, ninguno de los miembros del Poder la posee en su plenitud; y también entonces, obrando no por derecho propio sino por delegación, se extralimitaría en la órbita que á ella le señala la ley.

Parece por lo tanto que no es posible, ni en el concepto de la ciencia del derecho público ni en el de la ley constitutiva de la Nación, conceder más facultades ó atribuciones á los poderes que los que le señala expresamente la propia carta fundamental.



¿Las resoluciones ó disposiciones emanadas de cada miembro del Poder, en la órbita de sus atribuciones, podrán ser anuladas por alguno de los otros miembros?

Los razonamientos que hemos presentado ya en las dos cuestiones precedentes, nos evitarían agregar algo más para tratar de la presente, sin otro esfuerzo que el de raciocinar, en contrario, con algo de sentido común.

Señalados los límites de cada rama del Poder y la independendencia de sus funciones, obrando cada una en virtud de delegación y no por propio derecho; y reconociendo por origen una misma fuente que es la Soberanía, no puede menos que sentarse como principio inconcuso, que todo acto ejecutado dentro de la órbita de cada poder proviene de esa Soberanía. y que como ésta no reside para sus funciones absolutamente en ninguno de los órganos del Poder y la jurisdicción de estos acaba donde principia la de los

otros, ninguno puede destruir los actos de los otros. sino cuando la ley fundamental le da facultad para ello de una manera expresa; y la ley fundamental jamás podría dar esa facultad, que vendría á destruir el equilibrio y valor de los miembros y á nulificar la acción y la naturaleza misma del Poder Público.

Las disposiciones reglamentarias emitidas por el Ejecutivo en decretos ó acuerdos, lo mismo que las sentencias ejecutorias dictadas por el Poder Judicial tienen tanto valor como las leyes mismas emitidas por el Poder Legislativo: son obligatorias para todos y merecen el mismo respeto, porque son actos legítimos emanados de la Soberanía, que, para ellos se ejercitó por medio de los órganos Ejecutivo y Judicial.

A la cuarta cuestión, que consiste en averiguar *¿á qué poder corresponde reglamentar la forma y condiciones del pago de los impuestos y contribuciones establecidas por las leyes vigentes?* da solución precisa y clara la Carta fundamental. 1()

Función administrativa y no otra cosa, es la de reglamentar la forma y condiciones del pago de contribuciones, puesto que con ella únicamente se trata de facilitar el cumplimiento de las leyes emitidas por el Poder respectivo. Con tal función no se crea ni declara privativamente un derecho; sino que sólo se dan reglas acerca de la manera y forma en que debe realizarse la ley: nada nuevo se declara ni establece, y en tal concepto esa función por ministerio de la ley, como por consecuencia de la doctrina republicana, corresponde al Poder Ejecutivo.

[1] Artículo 77, incisos 7 y 17.



¿La Comisión Permanente de la Asamblea podrá calificar y declarar desde luego la inconstitucionalidad de una disposición emitida por el Ejecutivo?

Si como hemos sostenido antes, no hay órgano del Poder Político que tenga las facultades de hacer tal declaratoria respecto de los demás; si por lo mismo la Asamblea no puede hacerla, porque no tiene facultad para ello, mayor razón existe para sostener que una fracción delegada de la misma Asamblea como lo es la Comisión Permanente, no tiene competencia para hacerla, tanto más estando sus atribuciones muy circunscritas en la ley fundamental. (1) nunca sin faltar á su deber puede extralimitarse.

El mismo argumento cabe presentar para la 6ª cuestión, puesto que si puede la Comisión Permanente convocar á sesiones extraordinarias cuando la urgencia del caso lo demanda, debe ineludiblemente entenderse que sólo podrá convocarse para asuntos de la competencia de la Asamblea y jamás para aquellos que fueren ajenos á su misión; y como entre estos últimos se halla la calificación y declaración de inconstitucionalidad de los decretos y disposiciones reglamentarias emitidas por el Poder Ejecutivo, es consecuencia lógica negar esta facultad á la Comisión Permanente para convocar, con el fin de estudiar una disposición que ella no pudo calificar ni declarar inconstitucional.

(1) Arts. 62 y 63 de la Constitución.



¿El Decreto No. 456 alterará la ley monetaria vigente y establecerá nuevos impuestos?

Para responder á esta cuestión es necesario tener á la vista tanto el decreto N^o 456 como la ley monetaria. (1) (2) y nosotros que hemos visto detenidamente ambas leyes, sostenemos que no hay motivo alguno para creer que se ha alterado la ley monetaria.

(1) DECRETO NUM. 456.

José María Reina Barrios, General de División y Presidente Constitucional de la República.

CONSIDERANDO:

Que la depreciación de la plata, único metal circulante en el país y único en que se hacen los pagos, causa, entre otras alteraciones, la de convertir en ilusorios los presupuestos de ingresos, pues el Gobierno recibe como positivo un valor nominal y ficticio, y en oposición paga una parte considerable de sus obligaciones en oro, á los precios que fijan la producción y el comercio;

CONSIDERANDO:

Que en tal estado de cosas, el haber con que el Gobierno cuenta, queda mermado en razón inversa al nivel creciente entre el oro y la plata; haciéndose, en consecuencia, difícil cumplir los compromisos que á nombre y en beneficio de la Nación han contraído los Poderes públicos;

CONSIDERANDO:

Que normalizadas las instituciones y resuelto el Gobierno á sostenerlas por el imperio de la voluntad nacional, y acreditado el país en el exterior, sería penosa la suspensión de

[2] Capítulo único título XII libro I del Código Fiscal.— Véase esta ley al fin del presente folleto.

Tipo legal tienen las monedas de plata y oro, ese tipo no se modifica y para nada se toca. ¿Dónde está entonces la alteración? ¿Se ha creado un nuevo tipo ó signo de moneda? ¿Se ha alterado su ley? ¿Se ha modificado su valor *legal*? Fijese la atención en que decimos legal. Nada. Entonces, ¿dónde está la alteración en la ley monetaria?

Se ha dicho en el Decreto N^o 456: páguese una de las contribuciones tales en oro, y la otra en plata pero conforme al tipo legal reconocido en el capítulo único tit. XII libro I. del Código Fiscal. ¿En qué se

cualquier servicio necesario ó útil; y cedería en perjuicio de los afanes legítimos que se cifran en el porvenir, cortar la marcha en el plan severo, estricto y moralizador que se ha impuesto, ya faltando á deberes aceptados ó rehusando esfuerzos y sacrificios que exigen las dificultades;

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno caería en grave responsabilidad si no adoptase con precisión y en hora oportuna, aquellas medidas que alejen los peligros y allanen en lo posible á la sociedad el paso de este período de crisis y de trastorno económico, que atraviesa todo el mundo civilizado;

CONSIDERANDO:

Que en los momentos en que de una manera visible, entran en desarrollo y bienestar los intereses públicos, y tienen las leyes más imperio y son más justificadas las esperanzas del patriotismo, sería muy sensible que el Gobierno careciese de los medios indispensables para promover el bien y para disminuir los males llegados á nuestro pesar, por circunstancias extrañas y motivos ajenos al país, ó que se hallara en el conflicto de no poder mantener el crédito de la Nación á la altura que es de desearse;

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno bajo el desequilibrio real de los presupuestos, ocasionado por la reducción del valor metálico en

ha infringido la ley monetaria al aplicar sus preceptos y reconocer los tipos que ella señala?

No se ha creado impuesto alguno nuevo, y para convencerse de ello basta leer el Decreto.

Pero se nos dirá: se han aumentado los impuestos y contribuciones al exigir una parte en oro, porque el oro tiene hoy un cambio muy elevado sobre la plata. Está bien. Pero la cuestión presenta dos faces, legal ó jurídica la una y económica la otra.

En el primer concepto, si el Ejecutivo ha estado dentro de lo que prescribe la ley monetaria vigente,

que cobra los impuestos, se hallaría indefectiblemente en el caso de no tener recursos suficientes con qué cubrir sus atenciones, que son las de la República, y entonces sería ineficaz su anhelo para coadyuvar de un modo enérgico, á las solicitudes sociales y para poner en juego trabajo y diligencia contra la misma crisis monetaria, origen de las actuales perturbaciones;

CONSIDERANDO:

Que la riqueza del país y sus probabilidades de desarrollo en el porvenir, constituyen una razón muy poderosa para evitarle, por todos los medios posibles, las dificultades y entorpecimientos que provendrían de la falta de oportunas medidas de parte del Gobierno; y se unirían además á los obstáculos interiores los que depara el general movimiento económico:

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno, al procurar se normalice la situación rentística, no se propone introducir gastos nuevos ni planes que, en tiempo ordinario alterarían el presupuesto, sino llenar únicamente el vacío que resulta de la disminución de sus recursos y satisfacer una necesidad apremiante nacida del conflicto universal;

CONSIDERANDO:

Que si bien se hace indispensable afectar aunque directa-

podrá alegarse que hay ILEGAL aumento de impuestos? Es claro que no, por más que de hecho resulte ese aumento, que obedece á fenómenos mercantiles y no á nuevas leyes ni alteración de las vigentes.



Dando por supuesto, sólo para el efecto de presentar la cuestión bajo la faz menos favorable al Poder Ejecutivo, que éste hubiera alterado los impuestos al prevenir que el pago de ellos se efectuara parte en

mente el gravamen sobre el consumo de las importaciones, está en el deber del Gobierno proteger las condiciones de la clase proletaria, excluyendo de toda nueva disposición los elementos que concurren á satisfacer sus necesidades, como los hilos para tejidos, herramientas y demás útiles de agricultura y artículos de primera necesidad para la vida;

De acuerdo con el Consejo de Ministros,

DECETA:

Artículo 1. ° —Desde el día primero de Octubre próximo, se pagará en moneda de oro nacional un 10 p.⊂ de la totalidad de los derechos de importación; y cada trimestre, á contar de 1. ° de Enero de 1894 un 10p.⊂ más hasta llegar á 80 p.⊂ en el mismo metal.

Se exceptúan de esta disposición los hilos para tejidos, los instrumentos de labranza aplicables á la agricultura, la harina, el trigo y la carne salada.

Artículo 2. ° —Del impuesto de licores se pagará también desde el 1. ° de octubre próximo el 25 p.⊂ en oro hasta la época en que se pague por los derechos de importación el 50 p.⊂ en oro, en cuyo tiempo se cubrirá también el 50 p.⊂ en oro del indicado impuesto de licores.

Artículo 3. ° —De los derechos de exportación será cubierto el 50 p.⊂ en oro nacional desde el 1. ° de Octubre del corriente año, é igual cantidad se pagará de la contribución sobre inmuebles, siempre que los bienes declarados importen \$10,000 ó más.

oro, proponemos el punto noveno de nuestro cuestionario en la siguiente forma:

¿Facultado en primer término el Poder Ejecutivo por la Asamblea para reformar el Código Fiscal, con la restricción de no alterar los impuestos establecidos; y habiendo sido autorizado con posterioridad por la misma Asamblea para llenar el déficit de su presupuesto, sin taratira alguna, pudo el Ejecutivo, en virtud de esa, ley posterior, hacer la alteración de los impuestos, para llenar su déficit?

Artículo 4.º —Para facilitar los efectos de esta disposición, el Gobierno establecerá un Comité compuesto de personas honorables que extenderá en cantidades suficientes, certificados representativos de oro por 5, 20, 100 y 500 pesos.

Dicho Comité tendrá además las atribuciones siguientes:

A.—Seguir el curso de la cuestión monetaria en el mundo ó informar oportunamente acerca de ella á la Secretaría de Hacienda.

B.—Fijar cada 8 días, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el tipo del cambio de conformidad con el valor que tuviere la plata en el mercado de Londres.

C.—Vender los certificados por moneda de plata al tipo de cambio en el mercado.

D.—Invertir las cantidades de plata que ingresen á sus arcas en la compra de oro, que servirá para acuñarlo en moneda nacional conforme á la ley de la materia.

E.—Cambiar á su presentación los certificados representativos de oro, por moneda de oro nacional ó por plata de curso legal á opción de los interesados.

F.—Incinerar cada fin de mes los certificados que durante él sean cambiados.

G.—El Comité practicará todas sus operaciones bajo la inspección y garantía del Gobierno.

Artículo 5.º —Desde el 15 de Septiembre del año próximo de 1894 solamente se aceptará en las oficinas públicas la moneda nacional para el pago de las contribuciones.

Poco esfuerzo necesita á nuestro entender la resolución de este punto.

Si hemos de respetar el precepto de derecho universal de que una ley posterior deroga á la anterior sobre la misma materia, debemos consecuentemente convenir, en que facultado el Poder Ejecutivo para llenar el déficit del presupuesto fiscal después de aprobado éste y de haber hecho las economías que la Asamblea creyó prudentes, la facultad sólo podría ejercitarse alterando los impuestos, y esto dejó sin efecto *ipso facto* la prohibición anterior de no alterarlos. De otra suerte habría sido exigir el milagro de los cinco panes, ó bien aumentar la dificultad con un impuesto, lo que hubiera sido lo mismo que curar un mal lijero con otro mayor.

Artículo 6.º —La Secretaría de Hacienda queda encargada de reglamentar y ejecutar la presente disposición.

Dado en el Palacio del Ejecutivo de Guatemala, á primero de agosto de mil ochocientos noventa y tres.

JOSÉ MARÍA REINA BARRIOS.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública,

MANUEL CABRAL.

El Secretario de Estado en el
Despacho de Fomento,

J. M. GONZÁLEZ.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Relaciones Exteriores,

RAMÓN A. SALAZAR.

El Secretario de Estado en el Despacho de
Gobernación y Justicia.

MANUEL ESTRADA C.

El Secretario de Estado en el
Despacho de la Guerra.

PRÓSPERO MORALES.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

SALVADOR HERRERA.

Véanse los decretos legislativos que se refieren á estos asuntos, (1) y se convencerá cualquiera persona de que la prohibición general establecida en el Decreto número 222 que autorizó la reforma del Código Fiscal, de que no se alteraran los impuestos, quedó sin efecto en lo que se refería al particular de llenar el déficit, acerca de lo cual quedó facultado el Ejecutivo para hacerlo sin taxativa ni restricción alguna, y por lo tanto en esta parte quedó derogada la primera disposición por la que se dió después.



Sin pretensiones de ningún género, sin la confianza del que es profesor en una materia, y sólo con el propósito de provocar la discusión en asuntos de tan alta importancia para el país, nos hemos atrevido á borrar unas cuantas hojas, que si no tienen el mérito de la belleza en la forma, ni el del acierto en el fondo de las cuestiones, al menos sí tienen el de ser las primeras en llamar á la discusión á nuestra ilustrada juventud y el de presentar un campo ageno á las pasiones de partido y propio sólomente de la ciencia constitucional.

La crítica justa ó injusta con tal de que no sea injuriosa y personalista, indudablemente que habrá de hacer luz en las cuestiones que se sujetan á discusión; y si ella triunfa, también habremos conseguido nuestro propósito, que es el de que se discuta y que ya la sociedad se fije en lo que claramente dispone la carta fundamental, para no dejarse sorprender por las primeras impresiones.

[1] Decretos números 214 y 222.

TITULO XII

CAPITULO UNICO

MONEDAS

SECCION I.

Ley y peso de las monedas

Art. 567.—El derecho de acuñar moneda pertenece exclusivamente á la Nación.

Este derecho puede ser ejercitado por medio de la Casa de Moneda, ó por contratas con particulares, compañías ó gobiernos extranjeros.

Art. 568.—Se fabricará moneda de oro, de plata ó de vellón, con la ley, peso, tipo y dimensiones que se expresan en este Código.

Art. 569.—La unidad monetaria de la República es el peso dividido en cien centavos, con veinticinco gramos de plata, de ley de novecientos milésimos de fino.

Art. 570.—Las monedas nacionales de oro, de ley de novecientos milésimos de fino son:

1. º —La pieza de cinco pesos, que pesará ocho gramos setenta y cinco miligramos, con veintiún milímetros de diámetro;

2. º —De dos pesos cincuenta centavos, que pesará cuatro gramos treinta y dos miligramos, con diez y nueve milímetros de diámetro;

3. º —De un peso, que pesará un gramo seiscientos doce miligramos, con catorce milímetros de diámetro.

En consecuencia, cada kilogramo de oro, de ley de novecientos milésimos, producirá ciento veinticuatro piezas de cinco pesos cada una.

Art. 571.—Las monedas nacionales de plata son:

1. º —El peso, que pesará veinticinco gramos, de ley de novecientos milésimos, con un diámetro de treinta y siete milímetros;

2. º —El medio peso, que pesará doce gramos quinientos miligramos, de ley de novecientos milésimos, con un diámetro de treinta y un milímetros y valdrá cincuenta centavos.

3. º —La pieza de veinticinco centavos, que pesará seis gramos doscientos cincuenta miligramos, de ley ochocientos treinta y cinco milésimos, de veinticuatro milímetros de diámetro;

4. º —La pieza de diez centavos, que pesará dos gramos y quinientos miligramos, de ley de ochocientos treinta y cinco milésimos, de diez y ocho milímetros de diámetro;

5. º —La pieza de cinco centavos, que pesará un gramo doscientos cincuenta miligramos, de ley de ochocientos treinta y cinco milésimos, de diez y seis milímetros de diámetro.

En consecuencia cada kilogramo de plata de las leyes expresadas, producirá cuarenta pesos, ochenta medios pesos, ciento setenta piezas de veinticinco centavos, cuatrocientas de diez centavos y ochocientas de cinco centavos.

Art. 572.—La moneda nacional de vellón, pesará cinco gramos, y tendrá de ley noventa y cinco por ciento de cobre y cinco por ciento de níquel, con un diámetro de veinticinco milímetros, y valdrá un cen:avo.

SECCION II

Tolerancia en la ley y en el peso de las monedas

Art. 573.—La tolerancia de peso, en más ó en menos, será para las monedas de oro, de tres centigramos, y en la ley y finura del metal será de dos milésimos.

Art. 574.—La tolerancia en peso en mas ó en menos será para las monedas de plata como sigue:

En el peso de cien centavos, ocho centigramos;

En el medio peso de cincuenta centavos, seis centigramos;

En la pieza de veinticinco centavos, tres centigramos;

En la pieza de diez centavos, dos centigramos; y en la pieza de cinco centavos, un centígramo.

Art. 575.—La tolerancia en la ley y finura del metal será de tres milésimos.

La tolerancia, en más ó en menos, en el peso de la moneda de vellón, será de tres centígramos.

SECCION III

Sellos de las monedas

Art. 576.—Las monedas de oro y las de plata, hasta cincuenta centavos inclusive, llevarán estampado en el anverso el escudo de armas de la Nación, con la leyenda “República de Guatemala” y el año de su acuñación. En el reverso un busto que simbolice la libertad, ceñida la cabeza con una guirnalda de laurel é inscrita la palabra libertad, el valor, la ley de la moneda y las iniciales del ensayador.

Art. 577.—Las monedas de plata de veinticinco, diez y cinco centavos llevarán en el anverso el escudo de armas de la Nación, con la leyenda “República de Guatemala” y el año de su acuñación. En el reverso, al centro, el valor, y en la circunferencia, dos palmas enlazadas en la parte inferior.

Art. 578.—La moneda de vellón será igual en el anverso á la moneda de veinticinco centavos y en el reverso sólaente se inscribirá su valor, y su canto será liso.

SECCION IV

Disposiciones varias

Art. 579.—Las monedas nacionales de oro, de plata y de vellón que se acuñen, serán de curso legal, con la limitación de que la persona á quien se haga un pago no estará obligada á recibir más de cinco centavos en moneda de vellón.

Art. 580.—Los impuestos y contribuciones, tanto fiscales como municipales, podrán ser pagados sin limitación alguna en moneda de vellón ó fraccionaria de plata.

Art. 581.—Es prohibida la circulación de las monedas extranjeras de vellón y las fraccionarias de los Estados Unidos de Norte América y la pieza de cincuenta centavos de Méjico mientras conserven la ley de novecientos milésimos de fino.

Art. 582.—Las demás monedas extranjeras de oro ó plata tendrán curso legal, siempre que tuvieren ley y peso igual ó superior á la moneda nacional.

Art. 583.—Para los fines del artículo anterior, el Poder Ejecutivo hará ensayar anualmente el título y verificar el peso de las monedas extranjeras en circulación, designando las que deban aceptarse.

Art. 584.—La Casa de Moneda retirará de la circulación, cambiando por su valor nominal á los particulares, las monedas nacionales cuyos sellos estuvieren borrados ó que por el uso hubieren sufrido un desgaste de uno y medio por ciento en las de oro, de uno por ciento en las de plata de cien y cincuenta centavos, y de cinco por ciento en las de valor inferior.

Las monedas agujereadas ó cercenadas se rescatarán en la Casa de Moneda, según el peso y ley que tuvieren.

Art. 585.—Las barras de oro y de plata que se compren para ser amonedadas, se reducirán á la ley de novecientos milésimos, y se pagará el kilógramo de oro á seiscientos trece pesos ochenta centavos.

Art. 586.—La Casa Nacional de Moneda podrá acuñar por cuenta de los particulares moneda de oro ó plata de noventa milésimos de fino, cobrando en especie por derecho de acuñación, el uno por ciento en las monedas de oro y tres por ciento en las de plata.

La acuñación de la moneda fraccionaria de ley de ochocientos treinta y cinco milésimos y la de vellón, sólo podrá hacerse por cuenta de la Nación:

Art. 587.—El Poder Ejecutivo fijará siempre que lo crea conveniente la proporción en que deban hacerse las acuñaciones de las monedas de vellón y divisionarias de plata, según las necesidades de la circulación.

Art. 588.—El Poder Ejecutivo fijará, conforme á las necesidades de la circulación, la cantidad de monedas fraccionarias cuyo recibo sea obligatorio en todo pago.

SECCION V

Disposiciones transitorias

Art. 589.—La acuñación de la moneda de cobre se limitará á la suma de veinticinco mil pesos.

Art. 590.—Las monedas fraccionarias de plata continuarán circulando sin alteración alguna en su valor mientras se reacuñan conforme á este Código.

Art. 591.—En consecuencia de lo dispuesto en este Título,

serán de curso legal durante el primer año, contado desde la fecha en que comience á regir este Código, las monedas extranjeras que á continuación se expresan:

MONEDAS DE ORO

	Pesos	Cts.
Doble águila de los E.E. U.U. de N. A.....	20	
Aguila de	10	
Media águila de	5	
Cuarto de águila	2-50	
Dollar de	1	
Libra esterlina inglesa.....	5	
Media	2-50	
Pieza de veinte francos de Italia, Bélgica, Francia		
y Suiza.....	4	
Pieza de diez francos de Italia, Bélgica, Francia		
y Suiza.....	2	
Pieza de cinco francos de Italia, Bélgica, Francia		
y Suiza.....	1	
Pieza de veinte Reichsmark del Imperio Alemán	4-92	
Onzas españolas y mejicanas.....	16	
Medias onzas españolas y mejicanas.....	8	
Cuarto de onza	4	
Escudos	2	
Medios escudos.....	1	
Piezas de cien reales vellón españolas.....	5	
„ de cincuenta	2-50	
„ de cinco pesos del Perú, Colombia, Vene-		
zuela y Chile.....	5-50	

MONEDAS DE PLATA

Piezas de cinco francos de Francia, Italia, Bélgi-		
ca y Suiza.....	1	
Peso fuerte español.....	1	
Pieza de un peso de Méjico, Chile, Perú y Vene-		
zuela	1	
Dollar americano.....	1	
Pieza de cincuenta centavos mejicana.....	50	
Medio dollar.....	50	
Un cuarto de dollar	25	
Un dime.....	10	
Medio dime.....	5	



